

## RECURSO DE APELACIÓN

**EXPEDIENTE:** SUP-RAP-60/2019

**ACTOR:** MORENA

**AUTORIDAD RESPONSABLE:** CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL

**TERCERO INTERESADO:** PARTIDO DE LA  
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

**MAGISTRADO PONENTE:** REYES  
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

**SECRETARIO:** SERGIO IVÁN REDONDO  
TOCA

**COLABORÓ:** ALBERTO DE AQUINO  
REYES

Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil diecinueve

**Sentencia** definitiva que confirma la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/INAI/CG/1/2019, porque:

**1)** No se actualizó la caducidad del procedimiento sancionador, pues es evidente que no transcurrieron los dos años sin actividad procesal requeridos para su actualización; **2)** Del análisis de la resolución combatida, se advierte que la autoridad responsable sí valoró adecuadamente las pruebas que obran en el expediente, y **3)** La multa no es excesiva ni desproporcionada, ya que se tomaron en cuenta todas las circunstancias materiales de la infracción, las circunstancias subjetivas del infractor, sus condiciones económicas y el posible impacto de la sanción en el desarrollo de sus actividades ordinarias.

## CONTENIDO

GLOSARIO.....	2
1. ANTECEDENTES.....	2
2. COMPETENCIA.....	3
3. PROCEDENCIA.....	4
4. TERCERO INTERESADO.....	5
5. ESTUDIO DE FONDO.....	6
6. RESOLUTIVO.....	18

## GLOSARIO

<b>Consejo General:</b>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<b>INAI:</b>	Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
<b>INE:</b>	Instituto Nacional Electoral
<b>LEGIPE:</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<b>Ley de Medios:</b>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<b>SIPOT:</b>	Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
<b>Unidad Técnica de lo Contencioso:</b>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral

### 1. ANTECEDENTES

De los hechos narrados por el recurrente, así como de las constancias del expediente, se advierte lo siguiente.

**1.1. Denuncia ante el INAI.** El dos de julio de dos mil dieciocho, se presentó ante el INAI una denuncia en contra de MORENA, por la omisión de cumplir con diversas obligaciones en materia de transparencia.

A fin de investigar las conductas denunciadas, el INAI inició el procedimiento DIT 0212/2018.

**1.2. Resolución del INAI.** El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno del INAI declaró fundada la denuncia e instruyó a MORENA para que, dentro de los quince días hábiles siguientes, cumpliera con sus obligaciones de transparencia.

**1.3. Primer oficio de cumplimiento.** El dieciocho de octubre posterior, MORENA presentó el oficio MORENA/OIP/360/2018, mediante el cual,

pretendía acreditar el cumplimiento de la resolución emitida por el órgano de transparencia.

Sin embargo, el veinticuatro de octubre, el INAI le informó al partido denunciado que persistían las irregularidades, otorgándole cinco días hábiles para subsanarlas.

**1.4. Segundo oficio de cumplimiento.** El primero de noviembre de dos mil dieciocho, MORENA presentó el oficio MORENA/OIP/383/2018, mediante el cual pretendía justificar su omisión.

**1.5. Acuerdo de incumplimiento.** El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno del INAI emitió un acuerdo de incumplimiento, mediante el cual determinó que subsistía la negativa del partido de atender sus obligaciones de transparencia.

**1.6. Denuncia ante el INE.** El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se le informó al INE sobre el acuerdo emitido por el INAI.

En atención a esta notificación, el nueve de enero de dos mil diecinueve<sup>1</sup>, la Unidad Técnica de lo Contencioso instauró el procedimiento ordinario sancionador bajo el número de expediente UT/SCG/Q/INAI/CG/1/2019.

**1.7. Resolución impugnada.** El diez de abril, el Consejo General del INE determinó declarar fundado el procedimiento sancionador y le impuso a MORENA una multa de mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a \$80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 m.n.).

**1.8. Recurso de apelación.** Inconforme, el dieciséis de abril siguiente, MORENA presentó un recurso de apelación.

## 2. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer el presente medio de impugnación, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una determinación del Consejo General del INE, relacionada con la imposición de una multa a un partido político nacional, derivado de un

---

<sup>1</sup> Salvo mención en contrario se entenderá que todas las fechas hacen referencia al año dos mil diecinueve.

procedimiento ordinario sancionador en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución general; 186, fracción III, inciso a); y 189, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica; 40, 44, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios.

### 3. PROCEDENCIA

El recurso de apelación cumple con los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Medios, de acuerdo con lo siguiente.

**3.1. Forma.** La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable, en ella consta el nombre y la firma autógrafa del representante del partido político que interpone el recurso, se identifican los actos impugnados, la autoridad responsable, así como los hechos, agravios y preceptos presuntamente vulnerados.

**3.2. Oportunidad.** El recurso es oportuno en atención a que la resolución impugnada fue emitida el día diez de abril del presente año, por lo que el plazo para impugnarla transcurrió del once al dieciséis de abril, sin contar los días sábado trece y domingo catorce al no encontrarse vinculada con alguno de los procesos electorales que se encuentran en curso.

Por lo tanto, si el recurso de apelación se interpuso el día dieciséis de abril, es evidente que su presentación fue oportuna.

**3.3. Legitimación y personería.** Los requisitos señalados están satisfechos, en vista de que el partido político MORENA, a través de su representante, presentó el recurso de apelación ante el Consejo General del INE.

Asimismo, la autoridad responsable tuvo por reconocida la personería de quien promueve al momento de rendir su informe circunstanciado<sup>2</sup>.

**3.4. Interés jurídico.** MORENA cuenta con interés jurídico para interponer el recurso de apelación, porque controvierte una resolución del Consejo General del INE, mediante la cual se le impone una sanción.

**3.5. Definitividad.** Se satisface este requisito porque no existe otro medio de impugnación que el partido actor deba agotar antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal.

#### 4. TERCERO INTERESADO

En el presente asunto comparece quien se ostenta como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del INE, a fin de que se reconozca su intervención como tercero interesado.

El escrito de comparecencia cumple los requisitos previstos en la Ley General de Medios, como se expone a continuación:

**4.1. Forma.** El escrito se presentó ante la autoridad responsable, en él se hace constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente y se exponen las razones por las que considera debe subsistir el acto reclamado.

**4.2. Oportunidad.** El escrito de tercero interesado fue presentado dentro del plazo legal de setenta y dos horas previsto en el artículo 17 de la Ley de Medios, ya que de acuerdo con la cédula respectiva el medio de impugnación se hizo del conocimiento público a las doce horas del diecisiete de abril.

Por lo tanto, si el escrito de tercero interesado se presentó a las nueve horas con veintidós minutos del día diecinueve siguiente, es evidente que esto se efectuó dentro del plazo legal.

---

<sup>2</sup> Información disponible en la foja 33 del expediente principal.

**4.3. Legitimación y personería.** El tercero interesado es un partido político que comparece por conducto de su representante ante el Consejo General del INE, el cual tiene reconocida su personería por resultar un hecho notorio<sup>3</sup>, en tanto que este Tribunal Electoral le ha reconocido tal carácter en otros medios de impugnación<sup>4</sup>.

**4.4. Interés Jurídico.** El tercero interesado cuenta con un interés incompatible con el promovente, pues pretende que subsista la resolución impugnada.

## 5. ESTUDIO DE FONDO

### 5.1. Planteamiento del caso

- **Procedimiento en materia de transparencia DIT 0212/2018**

El INAI instauró el procedimiento en materia de transparencia DIT 0212/2018, mediante el cual analizó la posible omisión del partido político MORENA de cumplir con su obligación, consistente en publicar la información relativa a los montos destinados para gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial desglosada por el tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña<sup>5</sup>.

El órgano de transparencia declaró fundada la denuncia en contra de MORENA, por lo que le ordenó que cumpliera con dichas obligaciones.

Posteriormente, MORENA a efecto de cumplir con la citada resolución, presentó, en diferentes fechas, dos oficios mediante los cuales manifestó, respectivamente:

---

<sup>3</sup> Artículo 15, de la Ley de Medios.

<sup>4</sup> Véase, entre otros, el SUP-RAP-91/2018, SUP-RAP-117/2018 y SUP-RAP-241/2018.

<sup>5</sup> Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

(...)

XXIII Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

- Que la información se encontraba en proceso de carga, la cual se reflejaría en los siguientes días.
- Que parte de la información aún se encontraba en proceso de carga; otra, que se encontraba justificada en el campo de “nota”, no formaba parte del procedimiento de contratación, y respecto de otra información se enviaban los comprobantes de carga.

A partir del análisis de dichos oficios y una revisión del portal de transparencia donde debía publicarse la información, el INAI emitió un acuerdo mediante el cual concluyó que el partido obligado incumplió con la resolución, ya que subsistía la negativa de atender la obligación de transparencia relacionada con los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos.

- **Procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/INAI/CG/1/2019**

El INAI presentó una denuncia ante el Secretario Ejecutivo del INE en contra de MORENA, por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

Así, una vez substanciado el expediente, el INE declaró fundado el procedimiento ordinario sancionador, sustancialmente, por lo siguiente:

- El partido político al momento de dar respuesta al emplazamiento formulado, manifestó que la omisión se debió a un virus informático, lo cual en modo alguno puede considerarse como justificante para incumplir con la resolución del INAI.

Además, el partido político no aportó documento o medio de prueba alguno ante el órgano garante de transparencia o ante el INE, que soportara su dicho.

- Con anterioridad a que se resolviera el procedimiento de transparencia, el partido obligado tuvo diversas oportunidades de dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, tal como se

evidencia en los oficios MORENA/OIP/216/2018 y MORENA/OIP/261/2018, por los cuales el partido político manifestó que la información requerida se encontraba en proceso de carga, lo cual evidencia que tenía conocimiento de sus obligaciones desde el trece de julio.

- MORENA objetó los medios de prueba del expediente, pero sin precisar a cuáles se refería ni las razones que sustentaban su dicho.
- La conducta que se le atribuye a MORENA consistente en el incumplimiento de la determinación dictada por el INAI, tiene sustento en los elementos de prueba que obran en copia certificada del procedimiento DIT 0212/2018, la cual constituye una documental pública.

Finalmente, el Consejo General del INE calificó la infracción como grave ordinaria y le impuso a MORENA una multa de 1000 UMAS, equivalentes a \$80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)

- **Agravios**

Inconforme con la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador, MORENA presentó un recurso de apelación en el cual expone a modo de agravios los siguientes planteamientos:

1. Le causa agravio la tardanza para resolver el procedimiento especial sancionador, ya que la LEGIPE señala que una vez agotada la investigación se pondrá el expediente a disposición de las partes para que en un plazo de cinco días formulen alegatos; transcurrido dicho plazo la Unidad Técnica de lo Contencioso procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente en un término no mayor a diez días, el cual será enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del término de cinco días para su aprobación.



En el caso, los alegatos se presentaron el quince de febrero, por lo que el plazo corrió del veinte al cinco de marzo, por lo que pasaron más de cuarenta días para que la Unidad Técnica de lo Contencioso elaborará el proyecto de resolución respectivo; de esta manera se vulnera el principio de justicia pronta que deben observar todas las autoridades que imparten justicia y es evidente que se actualiza la excepción de prescripción.

2. Se valoraron indebidamente las pruebas por las que la autoridad responsable señaló que existió un incumplimiento injustificado de la resolución del INAI.

En ese sentido, mediante el oficio MORENA/OIP/383/2018 con fecha de primero de septiembre, dio cabal cumplimiento a la información requerida.

Cabe señalar, que de acuerdo con la jurisprudencia 13/2012, las causas de fuerza mayor eximen a los sujetos de sus obligaciones en materia de transparencia. En tal sentido, se comprobó que MORENA realizó todo tipo de acciones tendentes a cumplir con sus obligaciones.

Al respecto, se informó mediante el oficio MORENA/OIP/180/2019 que, a causa de un virus informático, no se pudo cargar la información solicitada. Así, una vez que se tenían los formatos con la información requerida, al momento de abrir los archivos para su carga en el sistema correspondiente, los mismos establecieron una leyenda de amenaza de virus, por lo que ya no fue posible subirlos para evitar un detrimento al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; no obstante, se consideró que MORENA había incumplido con dicha obligación.

3. Se impuso una multa excesiva al no valorar las condiciones del infractor, como es que la propia autoridad reconoció que el partido político no es reincidente, por lo que la conducta debió calificarse como leve y no como grave.

Para la individualización de la sanción, debió considerar los siguientes elementos: valor protegido o trascendencia de la norma; la magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado o el peligro al que hubiese sido expuesto; la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado; la forma y grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; su comportamiento posterior con relación al ilícito cometido; las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta y la capacidad económica del infractor.

En atención al principio de proporcionalidad, la autoridad debió justificar la adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada, lo cual no sucedió, ya que impuso una multa excesiva de 1000 UMAS, equivalente a \$80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), sin tomar en cuenta que se cumplió con la resolución del INAI desde el mes de noviembre dentro del plazo fijado, y que no se acreditó el beneficio económico cuantificable, y que no existió reincidencia ni dolo.

Es por esas razones que se considera que la autoridad le impuso una sanción sin la debida fundamentación y motivación y, en contravención a las jurisprudencias emitidas por los tribunales colegiados de circuito **MULTAS EXCESIVAS (ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL)** Y **"MULTA. MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FIJA SU MONTO, DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN"**, las cuales son obligatorias.

**5.2. No se actualizó la caducidad en el procedimiento especial sancionador, ya que es evidente que no transcurrieron los dos años sin actividad procesal requeridos para que se actualizara dicha figura**

Es infundado el agravio relativo a que la tardanza para resolver el procedimiento especial sancionador vulneró, en perjuicio del partido actor, el principio de justicia pronta que deben observar todas las autoridades que imparten justicia y que, en ese sentido, se actualizó la excepción de prescripción.

En primer lugar, cabe precisar que, si bien, el promovente hace valer la figura de la prescripción, de la lectura de la demanda se advierte que su planteamiento se encuentra encaminado a hacer valer la caducidad de la potestad sancionadora, pues señala que hubo un retraso considerable para resolver el procedimiento sancionador.

En ese sentido, la caducidad procesal se traduce en la extinción de la instancia por la inactividad procesal de las partes para ejercitarla en la forma y términos que la ley expresa, es por ello, que el planteamiento debe analizarse bajo esta figura.

Con respecto a la institución jurídica de la caducidad, esta Sala Superior ha determinado que el plazo para que opere en los procedimientos ordinarios sancionadores debe ser de **dos años contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de infracción**<sup>6</sup>.

En el caso, la autoridad tuvo conocimiento de los hechos presuntamente constitutivos de la infracción el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que se recibieron los autos del INAI<sup>7</sup>, y la resolución de dicho procedimiento aconteció el diez de abril del año siguiente, por lo que es evidente que no transcurrió el plazo de dos años sin actividad procesal para que se actualizara la caducidad de las facultades sancionadoras del INE.

Por otra parte, una vez establecido que no caducó el procedimiento, suponiendo que tuviera razón el partido actor en cuanto a que no se substanció y resolvió el procedimiento dentro de los plazos establecidos en la LEGIPE, esto no podría tener el efecto de revocar el acto que se controvierte, pues se trata de un planteamiento que no combate directamente las consideraciones en las que se sustenta el fallo

---

<sup>6</sup> Véase jurisprudencia 9/2018, de rubro: “CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR”.

<sup>7</sup> Véase de la foja 1 del cuaderno accesorio único del expediente.

impugnado<sup>8</sup>, por lo que seguirían rigiendo los argumentos en los que se basa la determinación del INE.

Adicionalmente, es importante señalar que, dentro de la sustanciación del procedimiento ordinario sancionador, entre otras actuaciones, el quince de marzo de este año, la Unidad Técnica de lo Contencioso tuvo por cumplido el requerimiento que le efectuó al INAI, en el sentido de que este organismo informara si tenía conocimiento de la existencia de un juicio de amparo promovido en contra del acuerdo de incumplimiento del expediente DIT 0212/2018.

Por lo anterior, se dio vista a MORENA con el oficio presentado por el INAI, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y el partido político desahogó la vista hasta el veintiséis de marzo, lo cual se acordó por la Unidad Técnica de lo Contencioso el veintinueve de ese mismo mes; es decir, **diez días antes de que se resolviera el procedimiento sancionador.**

Por lo tanto, pueden darse diligencias y actuaciones que válidamente retrasen la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, sin que esto pueda considerarse como un retraso injustificado en la impartición de justicia.

**5.3. Del análisis de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable sí valoró adecuadamente las pruebas que obran en el expediente**

---

<sup>8</sup> Véase tesis 36, de rubro. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Tercera Sala, de la SCJN. Publicada en el: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Apéndice de 1995, Página 63.

Véase tesis: XXI.1o.28 K, de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Tribunales Colegiados de Circuito. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Enero de 1994 Página: 163.

Es ineficaz el planteamiento en cuanto a que no se valoraron debidamente las pruebas, porque mediante el oficio MORENA/OIP/383/2018 de uno de septiembre, dio cumplimiento a la información requerida e informó mediante el oficio MORENA/OIP/180/2019 que, a causa de un virus informático, no se pudo cargar la información solicitada, y no obstante ello, la autoridad consideró que MORENA había incumplido con sus obligaciones.

En primer término, resulta incorrecto que mediante el oficio MORENA/OIP/383/2018, el partido actor dio cabal cumplimiento a su obligación de publicar los montos destinados a comunicación social y publicidad oficial, pues la autoridad responsable fue precisa en señalar que el INAI una vez que analizó dicho documento y sus anexos determinó que subsistía el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

En tal sentido, contrario a lo precisa en la demanda, es evidente que no se encuentra acreditado que MORENA cargó debidamente la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues, como se argumentó en la resolución impugnada, el propio partido hace valer excusas para tratar de justificar el incumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, es importante destacar, respecto de las obligaciones en materia de transparencia, que esta Sala Superior ha sostenido que el derecho a la información es un derecho fundamental cuya observancia debe ser garantizada por las autoridades vinculadas, mediante procedimientos ágiles, claros y expeditos.

En el caso, se destaca que al momento de contestar el emplazamiento y desahogar la vista de alegatos que le formuló la Unidad Técnica de lo Contencioso, MORENA señaló que mediante el oficio MORENA/OIP/180/sic, informó al INAI que, al momento de abrir los archivos para cargar la información requerida en el sistema correspondiente, los mismos establecieron una leyenda de amenaza de virus, por lo que ya no fue posible subir la información requerida.

Al respecto de este alegato, el Consejo General del INE razonó, en esencia, lo siguiente:

- Si bien, el partido obligado manifestó que mediante el oficio MORENA/OIP/180/sic, informó que debido a un virus informático no pudo subir la información requerida, **lo cierto es que no acompañó algún documento o medio de prueba que soporte su dicho.**

En ese sentido, MORENA no acreditó la existencia del virus informático.

En el caso concreto, el partido actor se limita a afirmar que no se valoraron debidamente las pruebas, ya que supuestamente informó mediante el oficio MORENA/OIP/180/2019 que, a causa de un virus no pudo cargar la información solicitada; no obstante, **no expone razonamientos ni señala la existencia de pruebas dentro del expediente que acrediten que, contrario a lo determinado en la resolución impugnada, sí presentó dicho oficio y probó la excusa a la que hace referencia.**

En ese contexto, se considera correcta la argumentación de la autoridad responsable, pues las afirmaciones de supuestas causas de fuerza mayor que no se encuentran acreditadas, no pueden servir de excusa para que los sujetos obligados como lo son los partidos políticos incumplan con sus deberes de transparencia.

Finalmente, debe destacarse que todas las manifestaciones para justificar el incumplimiento de su obligación en materia de transparencia se debieron hacer del conocimiento del INAI, en su momento oportuno, para que dicho órgano determinara lo conducente sobre el cumplimiento o no de la obligación mandatada en la resolución dictada en el expediente DIT 0212/2018 y, en el caso, se hacen valer con posterioridad a que el órgano de transparencia dictó la resolución correspondiente, determinó el incumplimiento del fallo y ordenó que se presentara la denuncia correspondiente ante el INE.

**5.4. La multa no es excesiva ni desproporcionada, ya que se tomaron en cuenta, entre otros elementos, todas las circunstancias materiales de la infracción, las circunstancias subjetivas del infractor, sus condiciones económicas y el posible impacto de la sanción en el desarrollo de sus actividades ordinarias**

Es infundado el agravio consistente en que se le impuso una multa excesiva al promovente, al no tomar en cuenta que cumplió con la resolución del INAI y que no se valoraron diversos elementos necesarios para la imposición de la sanción.

Por una parte, como ya quedó precisado en el apartado anterior, MORENA no probó que cumplió con sus obligaciones de transparencia, y tampoco acreditó la causa que supuestamente le impidió hacerlo.

En otro sentido, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que el INE sí tomó en cuenta los elementos necesarios para la imposición de la sanción, como se aprecia a continuación:

- **Reincidencia.** Determinó que no se actualiza la reincidencia.
- **Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió.** Consideró la falta como de gravedad ordinaria, para lo cual tuvo en cuenta que: 1) **la infracción es de tipo constitucional y legal**; 2) se tuvo por acreditada la conducta infractora, tal como se advierte en la determinación del INAI; 3) se trata de una sola infracción; 4) no se acreditó la reincidencia, y 5) se estableció que la infracción fue de carácter culposo.
- **Sanción a imponer.** Se determinó que debía imponerse una multa, por considerar que MORENA inobservó sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, por lo que con tal medida se permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, es decir, disuadir

al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro y se prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

- **Fijación del monto de la multa.** Primero se precisó que dicha multa podría ser de uno hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización al momento de la comisión de la infracción, esto es, en dos mil dieciocho.
- En ese sentido, señaló que tomando en cuenta las circunstancias objetivas que rodean la infracción, era adecuado, en el caso concreto, imponer una multa de mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a \$80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), lo anterior, en tanto que se trataba de una falta que se cometió derivado de una omisión **que vulneró el derecho humano de acceso a la información pública, y la cual sería suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares.**
- Tuvo en cuenta que no se acreditó un beneficio económico cuantificable, así como las condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades del infractor, para lo cual destacó que, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de abril de dos mil diecinueve, a MORENA le correspondía la cantidad de \$130,560,482.00 (ciento treinta millones quinientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), una vez descontado el importe de las sanciones, por lo que se encontraba en posibilidad de pagar la multa sin que se afectara su operación ordinaria, dado que dicha multa representa el 0.06 % de su ministración mensual.

Como se puede apreciar, la responsable sí fundó y motivo adecuadamente la multa, ya que tuvo en cuenta todas las circunstancias materiales en las que se registró la conducta infractora, y las circunstancias subjetivas del partido infractor, incluidas sus condiciones



económicas y el posible impacto de la sanción en el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Además, justificó plenamente que era insuficiente imponer una amonestación pública, así como las razones por las que era adecuado imponer una sanción mayor a la mínima prevista en la norma aplicable y mucho menor a la máxima, para cumplir con los fines de ejemplaridad, sin llegar a una sanción excesiva o desproporcionada, contrario a lo que sustenta MORENA.

Ahora bien, por lo que hace a su manifestación de que la infracción debió considerarse como leve al no acreditarse ninguna intencionalidad de pretender evadir la obligación de transparencia, esta Sala Superior considera que su alegato resulta incorrecto, pues el Consejo General consideró que la conducta debía calificarse como grave al tratarse de una infracción constitucional a un derecho humano fundamental, como es el acceso la información.

En tal sentido, para calificar la gravedad de la falta únicamente como ordinaria, la autoridad consideró, entre otras circunstancias, que no había dolo, porque no existían elementos de que las omisiones hayan obedecido a una intención deliberada o a una acción concertada de la que se advierta el deseo de provocar molestia o daño.

Bajo esta óptica, el partido no expone argumentos tendientes a demostrar que a pesar de ser infracciones constitucionales a un derecho humano fundamental como es el acceso la información, en cuanto a que no se han hecho públicos los montos destinados a comunicación social y publicidad oficial, la infracción solamente debía ser calificada como leve.

Por otra parte, en relación con que se trata de una multa desproporcional y excesiva, ya que la autoridad responsable no valoró ciertas atenuantes como que no existía reincidencia, no es posible utilizar este aspecto como un elemento atenuante de la sanción, porque dicho aspecto constituye en

realidad una agravante, sin que su ausencia pueda ser considerada para reducir la sanción a imponer.

Como ya se mencionó, la infracción se consideró como culposa, lo cual fue una de las circunstancias que se tomaron en cuenta para que la gravedad se calificara como ordinaria y no como especial o gravísima. Así, en vista de que se trató de una falta grave ordinaria es que se sancionó a MORENA únicamente con 1000 UMAS, y no como pudo haber sido en otros casos de mayor gravedad, donde se pueden imponer multas que van de los 5000 y hasta los 10000 UMAS.

En consecuencia, no se advierte que la multa impuesta a MORENA por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia sea excesiva o desproporcional, como pretende hacerlo valer el partido actor.

Finalmente, no tiene razón el promovente respecto de que, para la resolución del procedimiento ordinario sancionador, debieron aplicarse y resultan obligatorias las tesis emitidas por los tribunales colegiados, de rubros **“MULTAS EXCESIVAS (ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL)” Y “MULTA. MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FIJA SU MONTO, DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”**.

Lo anterior, pues los criterios que emiten los tribunales colegiados de circuito, si bien, en ocasiones pueden resultar orientadores para la resolución de los casos en la materia, no resultan obligatorios para los órganos electorales encargados de impartir justicia, como sí lo es la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o los criterios que emita sobre la materia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese contexto, si lo que pretende el partido actor al invocar las referidas tesis, es reforzar la idea de que no se motivó adecuadamente la

imposición de la sanción, a lo largo del presente análisis ha quedado evidenciado que dicha apreciación es incorrecta.

**6. RESOLUTIVO**

**ÚNICO.** Se **confirma** la resolución impugnada.

**NOTIFÍQUESE** como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el Magistrado José Luis Vargas Valdez, ante la Secretaria General de Acuerdos quien da fe.

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO**

**FELIPE DE LA MATA PIZAÑA**

**INDALFER INFANTE  
GONZALES**

**MAGISTRADA**

**MAGISTRADO**

**JANINE M. OTÁLORA  
MALASSIS**

**REYES RODRÍGUEZ  
MONDRAGÓN**

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

**BERENICE GARCÍA HUANTE**